

CUMBRE EUROPA - AMÉRICA LATINA**AMÉRICA LATINA : LA GOBERNABILIDAD
AMENAZADA***BIARRITZ, 26, 27 y 28 de NOVIEMBRE del 2003***CORPORACIÓN ESCENARIOS****AMÉRICA LATINA: GOBERNABILIDAD AMENAZADA****(DOCUMENTO DE AVANCE)****EL CONCEPTO DE GOBERNABILIDAD**

El concepto de gobernabilidad fue acuñado, como aporte de la Comisión Trilateral, en el año de 1975 por el Profesor Samuel Huntington, la cual hacía referencia a las dificultades que los excesos de la democracia podían tener sobre las posibilidades de gobernar. Posteriormente, la gobernabilidad se empleó para todos los cambios institucionales que deberían efectuarse en las democracias para que fueran gobernables. Recientemente, la cuestión de la gobernabilidad, particularmente en América Latina, se ha confundido con los problemas externos e internos que están haciendo imposible para los países latinoamericanos asegurar su estabilidad política sin deteriorar la institucionalidad democrática. En este sentido, más que una teoría de la gobernabilidad, de lo que puede hablarse en la región es de una teoría de la ingobernabilidad. Esta ingobernabilidad está amenazando las propias democracias y los esfuerzos en materia de democratización conseguidos durante los últimos veinte años.

De una manera más práctica, algunos autores identifican la gobernabilidad con la capacidad de los gobiernos para responder a las demandas sociales de sus ciudadanos y la disposición de éstos mismos a aceptar las ordenes impartidas para gobernarlos. Esta idea de gobernabilidad la relacionan con la legitimidad y el buen gobierno; habrá mayor o menor gobernabilidad en la medida en que los

gobiernos consigan satisfacer las necesidades inmediatas de calidad vida de sus gobernados, como empleo, educación, protección social y lo hagan de una manera eficiente, transparente, macroeconómicamente sustentable y verificable (*accountability*).

Está claro además que la gobernabilidad es, en sí misma, democrática. Los gobiernos autocráticos tienen la posibilidad de gobernar y de imponer sus objetivos sobre los ciudadanos o, inclusive, contra ellos pero la gobernabilidad que se edifica a costa de la legitimidad no se puede considerar una gobernabilidad democrática.

PANORAMA DE LA GOBERNABILIDAD EN AMÉRICA LATINA

América Latina muestra indudables avances en la evolución de sus sistemas democráticos. Hoy, todos los países del área son gobernados en democracia. Como resultado de los procesos de redemocratización iniciados hace más de veinte años para reemplazar los viejos gobiernos dictatoriales o populistas, hoy la región ha desarrollado una cultura democrática que la hace relativamente invulnerable a la aparición de nuevas formas autoritarias de gobierno.

Estos esfuerzos en materia de democratización han llevado a la celebración, durante los últimos quince años, de más de ciento veinte jornadas electorales en todos los países del área y el desarrollo de algunos consensos importantes sobre el control civil de las fuerzas armadas, la necesidad de una prensa libre, los beneficios de la estabilidad macroeconómica y la necesidad de introducir prácticas de buen gobierno relacionadas con la transparencia y la eficiencia de la administración pública.

Los ciudadanos latinoamericanos, además, apoyan mayoritariamente sus democracias. Lo confirman las encuestas de opinión (Latinbarómetro-Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad) que señalan que más de un 60% de los latinoamericanos consideran que la democracia es la mejor forma de gobierno para sus países y rechazan, por abrumadora mayoría, cualquier posibilidad de regreso a gobiernos militares o autocráticos. Sin embargo, un 53% de los mismos encuestados se declaran insatisfechos por el funcionamiento de los gobiernos democráticos porque consideran que no han podido solucionar los problemas que consideran más graves como el desempleo (37%) y la corrupción (19%).

El desencanto con el funcionamiento de la democracia latinoamericana se expresa más concretamente en la escasa confianza de la gente en algunas de sus instituciones, como la policía (un 65% desconfía de ella) y la justicia (64% desconfía de ella) y, particularmente, en el rechazo a algunas instituciones políticas como el Congreso (68% lo rechaza) y los propios partidos políticos (76% los rechaza) que, paradójicamente, son precisamente aquellas instituciones que los propios ciudadanos, a través de sus votos, podrían cambiar o mejorar.

Detrás de esta crisis de credibilidad o confianza que afecta la gobernabilidad latinoamericana se esconden varios fenómenos. En primer lugar, esta la propia crisis del modelo de desarrollo; los ajustes fiscales introducidos en los años 80 como respuesta a la denominada crisis de la deuda externa y las posteriores reformas iniciadas en los años 90 que más tarde serían conocidas como el Consenso de Washington, alteraron una dinámica social relativamente positiva que se llevaba hasta entonces y redujeron a la mitad los ritmos de crecimiento económico alcanzados en las dos décadas anteriores, durante la vigencia del denominado modelo de sustitución de importaciones. Como resultado de los acontecimientos de finales del siglo XX, en la región disminuyó el crecimiento económico y aumentó el empobrecimiento.

Todos los países de la región, sin excepción, muestran hoy coeficientes desfavorables de distribución del ingreso y unos niveles alarmantes de desempleo que se han localizado en el denominado sector informal de sus economías donde, en los últimos diez años, se han creado ocho de cada diez nuevos puestos de trabajo; como resultado de esta evolución negativa, el desempleo informal, que es el más precario y de menor remuneración, paso del 54% al 61% durante el mismo lapso. En estos años de crisis todas las familias latinoamericanas han tenido que desacumular activos para sortear las dificultades económicas y evitar el deterioro de sus condiciones de vida, activos materiales en los estratos medios y activos humanos en los estratos inferiores, sometidos a la proletarización o pauperización de sus niveles de vida.

Este déficit social, producido durante las últimas dos décadas perdidas para el desarrollo latinoamericano, ha producido tensiones y confrontaciones sociales que se han expresado en movilizaciones masivas como las de los piqueteros en Argentina, los coccaleros en Bolivia, los indígenas en Ecuador, los zapatistas en México, los desplazados por la violencia en Colombia o los Sin Tierra en Brasil, que expresan la inconformidad con un modelo de desarrollo que se concentró en el logro de la estabilidad macroeconómica y desatendió otros objetivos como el de la legitimidad social y la institucionalidad democrática.

La incapacidad de los sistemas políticos tradicionales para responder a estos desafíos contestatarios explican la existencia, con el déficit social, de un déficit democrático que se convierte en un problema grave de gobernabilidad en el área. El vacío creado por la crisis del sistema representativo ha sido suplido, en América Latina como en otros países del mundo, por la videopolítica o la política desarrollada por los medios de comunicación y la subpolítica ejercida por una constelación de organizaciones de la sociedad civil que representan y defienden una multiplicidad de intereses sin estar sometidas a ninguna responsabilidad política.

Este deterioro en las posibilidades de gobernabilidad aparece, paradójicamente, en momentos en que el Estado latinoamericano esta viviendo un proceso de debilitamiento en sus posibilidades de acción como consecuencia de las ultimas reformas institucionales que, a través de las privatizaciones y las desregulaciones, redujeron su margen de acción; de múltiples reformas constitucionales que han redistribuido los poderes ejecutivos sin variar el régimen de responsabilidad política y de la impotencia de los viejos

Estados nacionales para contener las fuerzas avasalladoras de una globalización económica que no ha estado acompañada de una consiguiente globalización política. Como consecuencia de ello se ha establecido un círculo vicioso entre gobernabilidad e institucionalidad que debe superarse en corto plazo para recuperar el espacio perdido de gobernabilidad durante los últimos años: los problemas señalados de gobernabilidad están afectando la institucionalidad democrática, como lo prueban las cada día más frecuentes crisis políticas de gobierno y el consiguiente deterioro de la institucionalidad incide en las posibilidades inmediatas de gobierno.

En este escenario confuso de la ingobernabilidad latinoamericana han surgido nuevos actores políticos como los medios de comunicación, los jueces o las ONGs que están haciendo política mientras se mantienen desaparecidos actores tradicionales como los congresos y los partidos que han dejado de hacerla.

A las dificultades, propias de la región, se añade el panorama del efecto disruptivo que están produciendo algunos fenómenos relacionados con el desarrollo de la globalización y que configuran un verdadero cuadro patológico de la misma. Por los mismos canales abiertos de la globalización, además de los bienes, servicios y capitales, también están circulando hoy drogas, armas, terroristas, corruptos y migrantes ilegales.

Estos tráfico ilícitos están obligando a revisar los viejos conceptos sobre la seguridad hemisférica que se apoyaban en la necesidad de defender la región de agresores externos y preservar la soberanía de cada país sobre sus fronteras geográficas. Los “nuevos agresores” son fuerzas desestabilizadoras que no respetan fronteras ni soberanías y que impactan de manera contundente a través de canales difícilmente interceptables. Esta realidad obliga a revisar los viejos conceptos de seguridad nacional para reemplazarlos por un nuevo concepto de seguridad cooperativa que convoque e integre los esfuerzos de todos los países frente a poderosas amenazas, externas en su origen pero domésticas en su tratamiento. Analicemos el cuadro de amenazas y actores de la gobernabilidad.

LAS AMENAZAS EXTERNAS

El poder disruptivo de los flujos ilegales tiene una evidente incidencia en las condiciones de gobernabilidad latinoamericana.

Ningún país latinoamericano puede sentirse ausente de fenómenos como el del narcotráfico cuyo mercado de US 400.000 millones al año, superior al del petróleo, está generando desórdenes en el sector campesino cultivador de coca y amapola de los países andinos, perturba los espacios aéreos y marítimos sometidos a la interdicción de las naves que circulan, desorganiza las finanzas y facilita la concentración ilegal de activos por cuenta del lavado de las divisas que produce y provoca tensiones internacionales con los países consumidores empeñados en trasladar la responsabilidad exclusiva de la solución del problema a los países productores de América Latina.

Recientes hallazgos académicos han demostrado que los viejos carteles están siendo reemplazados por pequeños carteles, mucho más dinámicos y activos, que la diferencia entre países productores y consumidores se está borrando en la medida en que países distribuidores (como Brasil) empiezan a ser importantes consumidores y países tradicionalmente conocidos por su posición consumidora (como los Estados Unidos) comienzan a figurar en la lista de productores de drogas como la marihuana.

Los dineros del narcotráfico compran tierras, alimentan economías subterráneas, corrompen jueces y policías, desequilibran las economías y ensucian la actividad política. A pesar de los esfuerzos desarrollados en los últimos años por lograr un enfoque equilibrado en la lucha contra las drogas ilícitas, el unilateralismo y las certificaciones unilaterales siguen siendo utilizadas para esconder la realidad de un consumo que, a pesar de todos los esfuerzos, sigue creciendo en usuarios habituales de alucinógenos de distintos tipos.

La corrupción es percibida en las encuestas como el segundo problema más grave después del desempleo; los ciudadanos piensan, con razón, que los dineros sustraídos son recursos y esfuerzos que se le quitan a la satisfacción de las necesidades sociales más sentidas. Además de lo que Johnston ha denominado la corrupción integradora proveniente de algunas empresas transnacionales inescrupulosas que han importado sus prácticas corruptas a los sistemas de contratación latinoamericana, existen otras formas propias de corrupción como la judicialización de la política que está ocasionando severos daños institucionales. En efecto, la política se ha sacado de sus escenarios naturales, como los recintos de los congresos y las asambleas provinciales para llevarla a los juzgados y las oficinas de las fiscalías; en muchas partes de la región, las diferencias políticas se ventilan ante los jueces, con el preocupante efecto colateral de la politización de la justicia.

El armamentismo ha resurgido en América Latina como una amenaza como consecuencia de la venta de los arsenales de armas convencionales provenientes de los antiguos países de la esfera socialista y el levantamiento por parte del gobierno de Estados Unidos del embargo a la venta de armas a los países latinoamericanos que mantuvo durante varios años. Y aunque la región presenta hoy la condición privilegiada de estar completamente libre de la producción y el comercio de armas de destrucción masiva, incluidas las nucleares, no se puede descartar que en el inmediato futuro este proceso rearmamentista pueda resucitar viejos conflictos fronterizos. Las cifras muestran que el presupuesto militar ha pasado de representar el 4% al 6.7% del PIB en los últimos diez años.

El terrorismo, por cuenta de los hechos sucedidos el pasado 11 de septiembre y el interés de los Estados Unidos en combatirlo, comienza a representar una nueva realidad perturbadora de la gobernabilidad en la región. En algunos países, como Colombia, está demostrada la presencia de redes terroristas internacionales en sintonía con los grupos alzados en armas.

El tráfico ilegal de migrantes también está dificultando las condiciones de gobernabilidad en el área. América Latina, tradicionalmente considerada como región de inmigrantes por la llegada de oleadas migratorias de africanos y europeos, se ha convertido en los últimos años en una zona de emigrantes. Éstos últimos representan ya una comunidad en los Estados Unidos de más de cuarenta millones de personas que remesan a sus familias casi US\$ 40.000 millones al año; en algunos países centroamericanos esta cifra representa hasta el 50% de sus ingresos por exportaciones.

El fenómeno de la migración masiva latinoamericana se produce en momentos en que el mundo desarrollado comienza a establecer severas limitaciones al flujo global de personas; en algunos países estas restricciones se han convertido en verdaderas actitudes xenófobas y racistas. El tratamiento policial de estas migraciones masivas convirtió vastas poblaciones de migrantes latinoamericanos en los Estados Unidos y Europa en auténticos ghettos de excluidos y explotados a partir de su condición de ilegalidad migratoria.

EL CONCEPTO DE SEGURIDAD HEMISFÉRICA COOPERATIVA

Las amenazas anteriores conforman un cuadro de inseguridad muy distinto del que caracterizó el desarrollo de la Guerra Fría cuando los países fueron forzados a alinearse alrededor de dos bandos ideológicos que dividían el mundo. Organismos regionales, como la OEA, cumplían en la región el nada grato papel de guardianes del anticomunismo. Las circunstancias de tranquilidad política resultantes de la distensión de los años setenta fueron alteradas por los problemas resultantes de la llamada crisis de la deuda externa y sus efectos en el deterioro de las condiciones de vida de millones de latinoamericanos. El Consenso de Washington, diseñado bajo las normas del racionalismo económico en la década de los 90, subordinó las metas políticas y sociales a la estabilidad macroeconómica e hizo más difíciles las condiciones sociales posteriores a la Guerra Fría.

Las relaciones de América Latina con Europa, durante las dos últimas décadas, han venido perdiendo importancia a medida que ésta última ha mirado más hacia el Este que hacia América. El diálogo político entre las dos regiones se ha reducido a algunas preocupaciones globales como la vigencia de los derechos humanos, la lucha contra las drogas o el rechazo al unilateralismo. Una situación bastante paradójica si se tiene en cuenta que, simultáneamente, los niveles de inversión europea en la región crecieron por encima de los de Estados Unidos, considerado por muchos años como el inversionista más importante en el área. Con algunas excepciones importantes como las Cumbres Iberoamericanas, los acuerdos de la Unión Europea, los acuerdos con MERCOSUR o los recientes acercamientos entre el Grupo de Río y Europa, los acercamientos entre América y Europa han regresado a los canales retóricos de hace algunos años.

Mientras tanto, el sistema institucional de gobierno de la región muestra algunos avances importantes, como el Protocolo de Washington que busca proteger las democracias amenazadas, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Resolución 1080 que creó un mecanismo de consulta permanente frente a la eventual suspensión de procesos democráticos regionales o la premonitoria creación de un Comité Interamericano de Lucha contra el Terrorismo creado dos años antes de la voladura de las torres de Nueva York.

Hacia el futuro, estos instrumentos y políticas deben complementarse con la adopción de un nuevo sistema de seguridad cooperativa que integre los esfuerzos de los países latinoamericanos en el combate de las amenazas ya comentadas. Siguiendo la jurisprudencia ya probada de que las democracias no inician guerras contra otras democracias, la nueva política de seguridad cooperativa debe empezar por revisar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), diseñado para confrontar amenazas externas contra la soberanía de los países; y reemplazarlo por un sistema basado en nuevas alianzas contra problemas comunes como el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo o los tráficos ilegales globales. En desarrollo de la misma idea, el papel de los ejércitos, de los organismos de inteligencia y de las policías también debería rediseñarse para concentrar su tarea en el enfrentamiento de estas nuevas amenazas que trasladan el concepto de las viejas fronteras, entre países, al de regiones y problemas, como el caso de la actividad del narcotráfico en la cuenca del Amazonas.

LA CRISIS DE LOS SISTEMAS POLÍTICOS

Los gobiernos latinoamericanos entre los años 50 y 70 oscilaron entre dictaduras militares y administraciones populistas. La situación actual parecería ser la de unos estados impopulares que han reemplazado los estados populistas y un populismo de mercado que reemplazó el viejo populismo de estado. La crisis del modelo de desarrollo ha coincidido con la del sistema representativo y el debilitamiento de los actores políticos tradicionales como la Presidencia, los congresos y los partidos importantes para reducir o tramitar las tensiones y exigencias sociales surgidas de la aplicación de un modelo de desarrollo desequilibrado entre lo social, lo económico y lo político.

El síndrome político típico de América Latina consiste en que la región tiene más territorio que nación, más gobierno que Estado y más poder que autoridad. La vieja receta de Montesquieu sobre la división de poderes ha sido derogada por las nuevas realidades institucionales que han atribuido funciones administrativas a los congresos, facultades legislativas a los jueces y capacidades jurisdiccionales a la rama ejecutiva del Poder Público. El control horizontal entre poderes comienza a ser sustituido en muchos países por el control vertical que ejercen los organismos de fiscalización popular o los propios ciudadanos a través de distintas formas, directas e indirectas, de participación.

El debilitamiento del sistema presidencialista regional corresponde a este contexto de deterioro. Las múltiples reformas constitucionales ocurridas en las dos últimas décadas como producto, en muchos casos, de un populismo constitucional, han venido menoscabando el poder presidencial al atribuir varias de sus funciones más importantes, como el manejo de la tasa de cambio, la regulación de los servicios públicos, la política en materia de televisión y los servicios sociales a bancos centrales autónomos, comisiones de regulación, organizaciones no gubernamentales o entidades territoriales descentralizadas.

Las nuevas constituciones latinoamericanas han repartido el poder presidencial sin cambiar el régimen de responsabilidades; los presidentes de la región siguen respondiendo por todo sin que su autoridad sea acatada completamente en ninguna parte. El sistema presidencialista latinoamericano, calcado del sistema norteamericano, carece de los contrapesos federales y el poder integrador articulador de la Corte Suprema de este último.

A este panorama se suma el agotamiento de los partidos tradicionales y su incapacidad para servir de intermediarios efectivos entre las demandas de los electores y las posibilidades de gobernarlas. Las crisis partidistas se ubican en el amplio espectro que va de la desaparición de la partidocracia venezolana hasta la inmanejable anarquía partidista brasileña, pasando por el agotamiento bipartidista colombiano. Concentrados en los quehaceres electorales, los partidos de la región se olvidaron de trabajar por ser alternativas, se clientelizaron y se refugiaron en el pragmatismo cotidiano, convertidos en pequeñas empresas regionales electorales.

A medida que los partidos tradicionales han perdido su protagonismo, los espacios políticos de representación han sido asumidos por organizaciones de la sociedad civil -conformando la subpolítica- o por algunos medios de comunicación en lo que se ha conocido como la videopolítica a través de la cual se deslegitima el ejercicio real de la política y se reemplaza por la política mediática apoyada en las encuestas.

Los congresos, como reflejo de los partidos, también han sufrido un deterioro perceptible. Aunque los ciudadanos latinoamericanos siguen considerando, por una gran mayoría, que no es posible pensar en la existencia de una democracia sin la presencia de un Congreso y unos congresistas, es evidente la falta de legitimidad que estos mismos ciudadanos le atribuyen hoy a los parlamentos que paradójicamente ellos eligen.

A la crisis mundial del sistema representativo ideado para organizar la intermediación entre las aspiraciones de los ciudadanos y las respuestas de los gobiernos, se suma en el caso latinoamericano la debilidad de los actuales sistemas políticos, prisioneros de un viejo presidencialismo agotado en su posibilidad de crear alternativas y unos congresos paralizados por la propia inactividad de los partidos que los integran.

Talvez haya llegado el momento de pensar en un nuevo esquema semiparlamentario o semipresidencialista que, sin prescindir de iniciativas

atribuidas al poder ejecutivo, promueva formas parlamentarias de gobierno y constitucionalice salidas políticas de ciertas crisis que afectan la gobernabilidad, como la posibilidad de disolver el Congreso y convocar a elecciones anticipadas o el voto parlamentario de censura constructiva que permita, en determinadas circunstancias de confrontación civil como las que se vivieron recientemente en Bolivia, relegitimar o reemplazar al Poder Ejecutivo sin traumatismos; en una segunda fase, podría establecerse una sana división entre las funciones de representación del Estado en cabeza de un Presidente como el manejo de las relaciones internacionales, el control del orden público interno y la preservación de la unidad territorial y las funciones propias del día a día de la administración pública en cabeza de un Primer Ministro o Jefe de Gabinete.

NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD

Las posibilidades de construir una nueva red de gobernabilidad latinoamericana están directamente relacionadas con la definición de una nueva institucionalidad. Rodrik y Subramanian han señalado que las diferencias entre los países ricos y pobres, en el contexto de la globalización, pueden explicarse por razones geográficas, por los procesos de integración en que están involucrados o por las diferencias en materia institucionales. Las instituciones que tienen que ver con la globalización, según los mismos autores, pueden ser “reguladoras de mercado”, “estabilizadoras del mercado” o “legitimadoras del mercado”.

Un análisis desprevenido de la lista de los países que hoy se consideran más globalizados indica que, por encima de los factores relacionados con su capacidad competitiva -como tecnología, fondos de capital, infraestructura- lo que hace la diferencia entre unas economías más o menos globalizadas son sus fortalezas institucionales y los niveles de educación alcanzados. La educación en efecto se encuentra en el eje de cualquier cambio importante global para América Latina en la medida en que ayuda a la gobernabilidad construyendo ciudadanía, favorece la competitividad, aumentando el capital humano, propicia la equidad a través de la redistribución de posibilidades educativas y es definitiva en la recuperación de la identidad como nación y como cultura.

Las instituciones, por su parte, comprenden el conjunto de normas de conducta, explícitas o implícitas, que regulan la relación entre gobernantes y gobernados y como tales, tienen que ver con la vigencia de la democracia representativa, el papel que juega el derecho, la existencia de mecanismos de solución de controversias y aplicación de la justicia, la conformación de redes de protección social y el desarrollo de políticas de estabilización macroeconómica.

Sólo una institucionalidad fuerte y renovada, con la generalización de prácticas de buen gobierno, puede conseguir el objetivo de relegitimar el Estado latinoamericano para que pueda seguir cumpliendo con la función esencial de asegurar la gobernabilidad de sus gobernados; el papel de asegurar la

governabilidad de las regiones; a partir de una nueva institucionalidad social que atienda los conflictos redistributivos a través de nuevas redes de protección social; una nueva institucionalidad económica que asegure mayores índices de crecimiento y equidad sin desmedro del mantenimiento de los niveles alcanzados de estabilidad macroeconómica en los últimos años y una nueva institucionalidad política que renueve los viejos actores de la política representativa e incorpore nuevos actores de la sociedad civil . Sólo así se asegurará una relación armónica en las demandas de los ciudadanos y las respuestas de sus sistemas políticos.

Especial consideración deberá tener esta nueva red de gobernabilidad en incorporar los nuevos actores políticos territoriales -regiones y ciudades-protagonistas principales del nuevo proceso global, a través de pactos fiscales que precisen el alcance de su autonomía, la asignación de competencias y la distribución de los recursos fiscales.

UNA NUEVA VISION DE REGIÓN

La creación de unas más favorables condiciones de gobernabilidad en América Latina tienen mucho que ver con la capacidad de sus dirigentes para acordar una nueva visión de región que articule los cambios institucionales que se requieren en un proyecto de región que obedezca a una visión de lo que queremos colectivamente. Como lo hizo Raúl Prebisch al comenzar la década de los 50, al proponer un modelo de desarrollo basado en la sustitución de la dependencia externa, también ahora América Latina debe acordar un nuevo propósito de desarrollo que responda a los desafíos que le plantea el escenario confuso y caótico de la globalización. Un pueblo sin visión, lo dice la Biblia, no prevalece.

Los desafíos de la Agenda Global son la gobernabilidad en lo político, la competitividad en lo económico, la equidad en lo social y la identidad en lo cultural. El reto de recuperar la identidad a partir de nuestras raíces y valores, debe ayudar a reunirnos como una gran nación, la nación latinoamericana, tal y como alguna vez lo quisieron y soñaron Bolívar, San Martín, Martí y O'Higgins.